REVISTA **RED** pensar

La naturaleza jurídica del recurso de casación en el modelo por audiencias del Código Procesal Civil

*The legal nature of the civil appeal
in the hearings model of the Civil Procedural Code*

Christelle Hernández Díaz

Revista REDpensar, volumen 8, número 2, Julio-Diciembre 2019
ISSNe: 2215-5384

REDpensando la Investigación 2
Recibido: 09 de octubre de 2019
Aceptado: 02 de diciembre de 2019

DOI: 10.31906/redpensar.v8.i2.190

Universidad De La Salle Costa Rica
Departamento de Investigaciones

redpensar@ulasalle.ac.cr | www.redpensar.ulasalle.ac.cr

La naturaleza jurídica del recurso de casación en el modelo por audiencias del Código Procesal Civil¹

The legal nature of the civil appeal in the hearings model of the Civil Procedural Code

Christelle Hernández Díaz²

Resumen

Este artículo se concentra en el análisis de los fundamentos doctrinarios y legales referidos a la naturaleza jurídica del recurso de casación en el modelo por audiencias del Código Procesal Civil, con motivo de la entrada en vigor de la Ley 9342 del 08 de abril de 2016. Dicha normativa revoluciona varios temas del proceso civil, principalmente los medios de impugnación y en especial el recurso de casación, como de “segunda instancia”. El cuerpo legal que ha entrado a regir, trajo consigo una importante innovación: la eliminación del recurso de apelación en las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía y de cuantía inestimables. De esta manera, este texto permite tener un acercamiento con los nuevos alcances que tiene el recurso de casación civil, según su naturaleza jurídica, convirtiéndolo en un verdadero recurso ordinario y ágil para la tutela del Derecho en segunda instancia, cuando así se requiera.

Palabras Clave: CÓDIGO PROCESAL CIVIL, RECURSO DE CASACIÓN CIVIL, PRIMERA INSTANCIA, SEGUNDA INSTANCIA, DEBIDO PROCESO, DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA.

Abstract

This article focuses on the analysis of the doctrinal and legal grounds relating to the legal nature of the appeal in the model hearings the Code of Civil Procedure, on the occasion of the entry into force of the Law 9342 of the April 8, 2016. That regulations revolutionize various issues in the civil process, mainly the means of appeal and especially the appeal of cassation, as of “second instance”. The legal body that has entered into force, brought an important innovation: the elimination of the appeal in the judgments in ordinary processes for higher amounts and inestimable amount. In this way, this text allows to have an approach with the new scope of the civil cassation resource, according to its legal nature, turning it into a true ordinary and agile resource for the protection of the Law in second instance, when required.

Keywords: CIVIL PROCEDURE CODE, CIVIL CASATION APPEAL, FIRST INSTANCE, SECOND INSTANCE, DUE PROCESS, HUMAN RIGHTS, JUSTICE.

1. Este artículo forma parte de la Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho de la Universidad La Salle de Costa Rica; defendida el 23 de agosto de 2019, en la ciudad de San José Costa Rica.

2. Cuba. Licenciada en Derecho. Asistente Legal en NCC Abogados. Correo electrónico: christelle0591@gmail.com

Introducción

El actual Código Procesal Civil instituye que las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía y cuantía inestimable solo serán recurribles por medio del recurso de casación como segunda instancia, modelo que transforma en su totalidad la vía recursiva aplicable con anterioridad al dictado de esta ley. Por esta razón, el tema que se desarrollará en este texto es de suma importancia en el ámbito jurídico y de carácter novedoso para el Derecho Procesal Civil.

Primero, el recurso de casación tradicional en los modelos anteriores fue duramente cuestionado y de alguna manera considerado como formalista, por las restricciones y exigencias legales. Con la reforma al Código Procesal Civil, todos esos mitos doctrinarios que generaba la figura en el pasado desaparecieron, ya que, en el nuevo sistema se logra presentar como un modelo, ágil, informal y expedito, que procura colaborar con un correcto acceso a la justicia.

Segundo, el recurso de casación civil se adapta a las exigencias de un mundo globalizado, convirtiéndose en una segunda instancia. Actualmente, la agilidad de los procesos y la celeridad de los tiempos son premisas innegables; sin vulnerar la justicia, la igualdad, el bien común y los valores positivos que el Derecho tiene como principios.

Es importante considerar que el Derecho es una ciencia dinámica, donde los institutos jurídicos no se mantienen estáticos e inalterables, sino que se transforman, se renuevan y se reinventan de acuerdo con los requerimientos del mundo moderno.

Este artículo procura analizar la naturaleza jurídica del nuevo recurso de casación civil y las garantías que éste brinda como segunda instancia en ciertos tipos de procesos, esto a la luz del debido proceso y los derechos fundamentales consagrados en los Organismos Internacionales de los cuales Costa Rica forma parte. De esta manera, el tema que se plantea se relaciona directamente con los Ejes Transversales que promueve la Universidad de la Salle, en especial con el eje de la “lucha contra la pobreza y la exclusión social”, en el tanto que, el acceso a la justicia es un derecho que se le debe garantizar a toda persona, sin importar su condición social. Los costos para acceder a la justicia en muchas ocasiones son elevados; para contrarrestar este efecto, las innovaciones al sistema judicial tienen como objetivo permitir a los solicitantes del amparo legal, una justicia pronta y cumplida.

Naturaleza jurídica del recurso de casación civil costarricense

Los orígenes del recurso de casación costarricense se remontan al Código General de 1841, conocido como Código de Carrillo, el cual fue el primer cuerpo normativo procesalista de Costa Rica. Dicho Código estableció las pautas por seguir respecto a los medios de impugnación reconocidos en su época, los cuales nacieron con carácter de extraordinarios. El primero de ellos se denominó “nulidad”, mismo que se refiere al derecho que tenían las partes de un proceso a exteriorizar ante la instancia competente su inconformidad por el dictado de una resolución. Este instituto había sido tomado del Derecho español, como resultado de la colonización de la época.

La razón de ser del recurso de casación civil es procurar que en los fallos judiciales, la ley y la doctrina sean aplicadas de manera acertada, sin que los jueces incurran en errores, una vez que interpretan, aplican y ejecutan la ley procesal, bien sea que, cometan vicios “*in procedendo*”, que traen como resultado el quebranto a la legalidad del proceso, provocando un control legal en el procedimiento, o que sus resoluciones sean típicas de vicios “*in iudicando*”, con los cuales se crea indefensión a las partes, dado que se interpreta erróneamente la ley y para combatirlo se crea un control de la legalidad en el juzgamiento, de modo que, si se incurre en alguno de estos vicios se obstaculiza el acceso a la justicia.

La casación civil actual es un recurso de segunda instancia, no de legalidad, menos formalista y que responde a un sistema procesal sustentado en la oralidad, el cual ofrece al ciudadano una justicia más célere y de mejor calidad. Se clasifica como un recurso ordinario y vertical, puesto que es conocido por un tribunal diferente y superior en grado jerárquico, al que se pronunció sobre la resolución que se recurre. Se rige por el principio dispositivo, ya que sobre las partes recae la actividad procesal, las cuales deben estimular la función judicial, además que están obligadas a fundamentar sus reclamos y solamente con relación a lo que manifiesten, se pronunciará la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

De esta manera, se demarcan los límites de este órgano jurisdiccional para conocer del asunto. La oficiosidad, no se contempla como principio procesal en el instituto de la casación, ni en ningún recurso.

El recurso de casación como elemento integrante del debido proceso

El Código Procesal Civil vigente, según la Ley No.9342, regula el instituto de la casación civil en sus ordinales 65 y 69. Un análisis de las disposiciones específicas, aplicables a la casación civil, llevan consigo un examen previo de las disposiciones generales de los medios de impugnación, desde la óptica del recurso civil. El contenido del artículo 5, establece los fundamentos que orientan los medios de impugnación en general.

La Ley Procesal de modo expreso, prevé los únicos medios de impugnación que reconoce el sistema judicial costarricense, los cuales son alegados en defensa de los derechos ciudadanos. En caso de las sentencias de primera instancia, dictadas en los procesos ordinarios de mayor cuantía y cuantía inestimables, únicamente se procederá con el recurso de casación como segunda instancia, conforme con lo establecido en el ordinal artículo 69.1 del Código Procesal Civil.

La eliminación de la apelación en este tipo de procesos, flexibiliza la casación, pero no del todo, porque recurso al fin, su redacción requiere de un alto conocimiento en la materia civil, por parte del abogado que hace uso de este medio de impugnación. Ante esta modificación, los errores u omisiones por parte de quien alega su derecho de manera insuficiente y carente de fundamento, pueden generar graves consecuencias y perjuicios de difícil reparación.

El Código Procesal Civil en su artículo 69.4 estipula los requisitos que debe contener el recurso de casación.

En ese sentido, el recurso deberá indicar:

I) la naturaleza del proceso, las partes, la hora y fecha de la resolución impugnada; II) la mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas [requisito que no aplica en casos en que el recurso se sustente en supuestos de error en la interpretación de la prueba, solo aplicará el ordinal 41.5]; III) la expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de forma ordenada, clara y concisa. (Artículo 69, recurso de casación)

Los requisitos que la ley contempla para la admisión de la casación, no constituyen una mera formalidad, acompañada de impedimentos y trabas para quien recurre. La razón de ser de dichos requerimientos, se sustentan en la necesidad de una correcta fundamentación de los motivos que justifican la impugnación, para facilitar a la Sala de Casación, conocer de los alegatos del litigante.

Ante la imperiosidad de este recurso, por ser el único impugnabile en procesos ordinarios de mayor cuantía, el plazo para la presentación se mantiene, siendo 15 días hábiles para la interposición del recurso por parte del recurrente.³ Este plazo comienza a regir a partir del día hábil siguiente en que fueron notificadas todas las partes de la sentencia de primera instancia.

Los medios de impugnación han sido mal utilizados por las partes, ya que en muchas ocasiones se han empleado como mecanismos para retrasar el dictado de la sentencia definitiva en varios procesos y la casación no queda exenta de este fenómeno. El actual recurso de casación, no permite ser empleado con este fin.

La razón principal de la supresión de los efectos suspensivos del recurso, es eliminar la interposición excesiva de recursos con fines dilatorios. De este modo, se descartan estos mecanismos dolosos que anteriormente eran utilizados y se procura un proceso expedito, sin prolongaciones innecesarias y actuaciones fraudulentas y simuladas, para lograr el acceso a una justicia pronta y cumplida.

El artículo 69.6 de la Ley Procesal Civil, claramente expresa que, la admisión del recurso no produce efectos suspensivos, siendo así, el Tribunal no pierde la competencia conferida, la cual le permite conocer todos los asuntos diligenciados en pieza separada al expediente principal, así como de medidas cautelares, tutelares y ejecución provisional.

La normativa procesal costarricense determina que el recurso de casación se fundamentará con base en dos motivos: el primero de ellos es por razones procesales, en donde existe violación de leyes que establecen el procedimiento, el cual está referido a las siguientes causales: I) infracción del debido proceso que no se haya podido subsanar, II) vulneración del principio de inmediación por ausencia de jueces en la audiencia de prueba, conclusiones o deliberación. III) quebranto de la inmediación por ausencia de jueces en audiencia, IV) indebida constitución del Tribunal, V) ausencia o contradicción grave de fundamentación y VI) incongruencia (no incluye omisión de costas o incidentes intrascendentes). La Ley contempla que, para la aplicación de estas causales, solo está legitimado el afectado por el vicio. Además, establece que se debe haber pedido la subsanación del vicio oportunamente y si se trata de una incongruencia por omisión, se debe haber solicitado la adición del fallo.

El segundo motivo es por razones de fondo, identificado por las violaciones de ley a la parte dispositiva de la sentencia, en cuanto al fondo del asunto, ya sea que, tienen lugar errores en la apreciación de la prueba o en la aplicación o interpretación indebida de las normas de fondo, vicio que contempla las siguientes causales: I) violación de normas sustantivas a) constitución, tratados, leyes, decretos y normas contractuales y b) comprende normas sobre valoración de la prueba y su interpretación y II) quebranto de la cosa juzgada: siempre que no se haya podido alegar oportunamente.

Por lo tanto, la Sala Primera deberá dictar sentencia en el plazo de 15 días. En primer orden conocerá sobre los argumentos relacionados con los vicios procesales y de seguido se analizarán los motivos de fondo, si los primeros no fueren procedentes.

El recurso que esté sustentado en vicios de orden procesal, que se declare admitido y la Sala resuelva a favor del recurrente, será devuelto al proceso al Tribunal a *quo*, con el fin que se dicte una nueva sentencia conforme con derecho, en la que no se transgreda la ley objetiva.

3. Sería interesante analizar si una posible ampliación del plazo para impugnar, hubiere sido beneficioso o no para el recurrente, por la responsabilidad y trascendencia que demanda este recurso. Tampoco se trata de hacer extensivo el proceso como orientaba la ley anterior, pero, sí de tener conciencia de la importancia de este medio de impugnación.

Si el recurso se fundamenta en razones de fondo y la Sala Primera lo declara con lugar, este mismo órgano dictará una nueva sentencia, acto conocido como “casar la sentencia” y el nuevo fallo estará motivado por los alegatos del recurrente y contendrá la correcta interpretación y aplicación de la ley que los tribunales anteriores no pudieron resolver.

La casación civil actual, ha experimentado cambios significativos que jamás se pensaron que llegaran a ocurrir en este instituto procesal. Dicho recurso ha sido definido desde sus inicios como extraordinario, técnico y de difícil acceso, hasta que llegó el momento en el que la casación se reinventó. De esta manera, pasa a ser un recurso de segunda instancia, antiformalista, positivo y de fácil acceso; por ser la segunda instancia una revisión del fallo y no una apelación.

La supresión de la apelación, aplica únicamente para las sentencias de primera instancia en los procesos ordinarios de mayor cuantía, no para el resto de las sentencias de procesos ordinarios que sí gozan del recurso de casación directa. La casación de los procesos ordinarios de mayor cuantía es una segunda instancia, prevista para revisar el fallo que se recurre.

Aunque algunos profesionales en Derecho discrepen de esta nueva caracterización de la casación, deben revalorar el instituto desde esta nueva óptica, en donde se han limitado los tecnicismos que movían la casación y permitir un acceso generalizado a la misma. Lo anterior, se ha logrado a través de la manifestación de varios principios del proceso, como el principio de tutela judicial pronta, cumplida y efectiva, así como el de instrumentalidad.

A lo largo de los años se ha conceptualizado erróneamente a la casación, porque nunca ha sido un recurso formal. La fundamentación de esa afirmación se encuentra en el estudio de la naturaleza jurídica de esta figura del Derecho. La casación ha sido un recurso extraordinario, por permitir su procedencia solo en los casos que expresamente la ley así lo determina, a través de resoluciones y motivos concretos. Por lo tanto, el proceso de casación pasó de ser un recurso técnico no formalista a un recurso de segunda instancia con la reforma procesal.

La interrelación entre los Derechos Humanos y el recurso de casación civil

Los pronunciamientos emitidos por los jueces en razón del principio del “debido proceso”, como derecho fundamental de todo ser humano, pueden ser revisados por otra persona diferente a quien los emitió y que ostente igual o mayor autoridad para sentenciar y juzgar las leyes. Este fenómeno jurídico es conocido como el “principio de la doble instancia”, el cual brinda mayor seguridad jurídica a las partes del proceso, por el hecho de ser revisado nuevamente, quiere decir, un mismo fallo judicial.

El jurista argentino, Loutayf (1989) respecto a los atributos del instituto de la doble instancia, expresó:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados pronunciamientos, ha sostenido como principio que la doble instancia no constituye un requisito de la garantía constitucional de la defensa en juicio, y por lo tanto el legislador tiene libertad para implantar un sistema de instancia única o plural, o de limitar los supuestos de admisibilidad de los recursos ordinarios, sin que se afecte por ello tal garantía constitucional. (p.5)

La norma suprema de Derecho Internacional que estipula este principio básico del derecho, es la Convención Americana de Derechos Humanos⁴ de la Organización de Estados Americanos (1969), en su artículo 8 sobre las Garantías Judiciales, establece:

4. Suscrita en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), relativa a los Derechos Humanos y ratificado por Costa Rica el 8 de abril de 1970, la cual ha estado vigente desde el 8 de julio de 1978.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

Con relación a la aplicación de este artículo, es importante resaltar que dicha norma establece y determina el acceso a la segunda instancia como un derecho fundamental, que debe ser tomado en cuenta en todos los ordenamientos jurídicos, tal y como se verá en el desarrollo jurisprudencial de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Sala Constitucional, ha expresado que para interpretar correctamente la palabra “recurrir”, debe analizarse de manera extensiva, no restrictivamente y no asimilándola exclusivamente a la vía de la apelación.⁵

La apelación como postulado esencial del principio de la doble instancia, está referido únicamente a la materia penal, de acuerdo con el criterio externado por la Sala Constitucional y demás tratados de Derecho Internacional.

- **Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos⁶**

Es la primera norma internacional que regula el derecho de la doble instancia en su artículo 14.5. Indica que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior, conforme a lo prescrito por la ley” (artículo 14, epígrafe 5).

La finalidad de la norma es precisamente la corrección de los errores que puedan suscitarse en el conocimiento de una causa penal, para que el juzgamiento sea conforme con derecho y no producto de la negligencia, la incapacidad y/o la corrupción.

Desde el Código de Procedimientos Penales de 1976, existe el Derecho Constitucional de recurrir la sentencia condenatoria emitida por los Tribunales. En un principio el derecho de la doble instancia fue consagrado por medio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y fue reforzado luego de dos años, por la Convención Americana de Derechos Humanos.

5. Entiéndase recurrir, como el efecto de interponer un recurso contra una resolución judicial que sea susceptible de ello, lo cual significa, impugnar en sentido amplio.

6. Este Convenio fue ratificado por Costa Rica el 29 de noviembre 1968 y está vigente desde el 23 de marzo de 1976.

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (2014) a través de la Sala Constitucional⁷, explica sobre el principio de la doble instancia:

El derecho a la doble instancia, consiste en el derecho fundamental que tiene toda persona imputada de un delito dentro de una causa penal, a recurrir la sentencia condenatoria dictada en su contra, para que un órgano superior revise lo resuelto en primera instancia. Este derecho, se desprende claramente, del artículo 8, punto 2, inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que integra las garantías del debido proceso, tutelado en el artículo 39 de la Constitución Política. [...] Sin embargo, cabe resaltar que, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha señalado que tal como lo establece la citada Convención, el principio de doble instancia está referido, únicamente, a la materia penal, por lo que debe ser exigida solo dentro de un proceso penal, bajo determinadas circunstancias, y no en procesos correspondientes a otras materias. Así las cosas, tratándose de otras materias como lo es la contenciosa administrativa y la civil, el legislador se encuentra facultado para diseñar los procedimientos aplicables, según su naturaleza y particularidades, con el fin de garantizar el principio justicia pronta y cumplida consagrado en el artículo 41 constitucional, siempre que estos diseños cumplan los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por otra parte, resulta importante mencionar, que la doble instancia tampoco implica un derecho a que todas las resoluciones que dicten en un proceso - incluso penal - puedan ser recurridas ante un superior, sino más bien, se trate de aquellas que dan por terminado el proceso, o bien, las que por su naturaleza tengan efecto propio, ya que el resto de los actos o resoluciones, pueden ser revisadas a través de otras instancias, a través de la revisión de la resolución final. Lo contrario, sea permitir que la apelación de todas las resoluciones que dicten, implicaría un entramamiento del sistema judicial, en perjuicio del principio justicia pronta y cumplida. (Sección III, sobre el principio de doble instancia)

De los pronunciamientos citados, se concluye que las normas amparan el criterio expresado en este artículo: el Derecho penal y el Derecho civil, dos ramas diferentes de esta ciencia, que no pueden ser reguladas bajo los mismos postulados, ya que existen particularidades que los definen como tal. Por un lado, en el Derecho penal la revisión del fallo en una segunda instancia constituida por la apelación, es un derecho fundamental; mientras que, en Derecho civil la apelación no desaparece con las nuevas reformas en materia de impugnaciones, sino que se reserva para determinados procesos.

La jurisprudencia y los criterios de la Sala Constitucional, tienen el carácter de ser vinculante erga omnes, excepto para sí misma. Este órgano establece los límites entre los institutos del Derecho civil y el Derecho penal. La posición de la Sala es firme y no cambia, la segunda instancia obedece a una revisión del fallo y no una apelación. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia (2014), por medio de la resolución No 2014-09888 de la Sala Constitucional, señala:

El que se niegue el derecho a recurrir en casación en un asunto civil en razón de la cuantía, no conlleva una violación al principio de doble instancia, por cuanto existe la oportunidad de que el fallo de primera instancia sea examinado por un tribunal de segunda, lo que implica que el accionante tuvo amplia oportunidad de defender sus derechos a través de un proceso ordinario y de que la sentencia del a quo fuera revisada por un Tribunal colegiado en segunda instancia (...) Como se dijo en el considerando anterior, sea cual sea la cuantía de un asunto que se discuta en la jurisdicción ordinaria, el debido proceso está debidamente garantizado y es por ello por lo que el hecho de que algunos tengan opción al recurso de casación y otros no, es una decisión de política legislativa en cuanto al procedimiento judicial que no afecta los derechos fundamentales de las partes. El derecho fundamental a un trato igualitario en cuanto al acceso a los tribunales de justicia para dilucidar los conflictos y la garantía de que todos por igual se les respeten el debido proceso no resulta violentada por la existencia de más o menos recursos de impugnación. Dependiendo de la cuantía del asunto que se discuta. (Sección III, párr.4-5)

7. Sentencia No 2014-002528.

En contra posición, algunos expertos en materia de Derechos Humanos no comparten el criterio manifestado por la Sala Constitucional, en cuanto a que el principio de la doble instancia consagra el artículo 8, punto 2, inciso h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que solo se refieren a la materia penal, lo cual debería ser para todas las materias, pues en todas se pueden dar vulneraciones y debilidades por parte de los jueces.

Cada rama del derecho, ha creado los mecanismos necesarios que garantizan el derecho de defensa, así como el de justicia pronta y cumplida. El proceso de casación en el Código Procesal Civil, ha sido una muestra fidedigna del trabajo. Es la casación civil, un recurso de segunda instancia, con el que se asegura la revisión del fallo de los Tribunales de primera instancia, por ser esta la correcta acepción de lo que significa impugnar y recurrir una resolución judicial.

- **Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José⁸**

Este tratado internacional, es conocido como uno de los pilares esenciales en materia de protección y promoción de Derechos Humanos en América. En el caso del sistema jurídico costarricense, esta norma de derecho internacional, es la ley máxima que instituye el derecho de la doble instancia, toda vez que, el artículo 7 de la Constitución Política establece la superioridad de un tratado internacional, sobre la ley ordinaria.⁹

El Derecho es una ciencia dinámica, no queda estática ante los nuevos cambios sociales, por lo tanto, la defensa y protección de estos, debe de hacerse de manera progresiva. El Estado debe ser garante de los derechos económicos, sociales y culturales, contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no va dirigida a un grupo específico de personas, sino que se refiere a todas las personas sujetas a la jurisdicción de un Estado, órgano encargado de velar por el cumplimiento de los principios contenidos en el Pacto.

El Pacto está estructurado de la siguiente manera: en una primera parte, consagra los deberes de los Estados y derechos protegidos, haciendo mención expresa de los derechos civiles y políticos. En una segunda parte, se refiere a los medios de protección de los derechos supra citados. Con una simple lectura de la norma, se puede corroborar que Costa Rica logra con los postulados del Pacto. Sobre el tema en cuestión, la eliminación de la apelación en los procesos ordinarios de mayor cuantía, no vulnera principios ni derechos fundamentales, porque se garantiza el derecho a recurrir a un Tribunal Superior, que será quien conocerá la resolución impugnada.

Al respecto, la normativa procesal civil reconoce como medios de impugnación: la revocatoria, la apelación, la casación y la revisión. Esta afirmación que se ampara en el artículo 25 de la Convención, apartado que pertenece al capítulo segundo, texto que enumera los derechos civiles y políticos.

8. Realizado en San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, tras la celebración de la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derechos Humanos. Entró en vigor hasta el 18 de julio de 1978.

9. Constitución Política de Costa Rica, artículo 7º “los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto”.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Parte se comprometen:
 - a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
 - b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
 - c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Costa Rica, al firmar y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, aceptó y reconoció otorgarle el poder a la CIDH, para que interpretara el texto de la Convención y del criterio emitido, ajustándose al fallo de este Organismo. La competencia de la Corte, no solo radica sobre cuestiones de litigio, sino que, también puede atender solicitudes consultivas que le formulen los Estados, solo que el criterio emitido, asimismo que tendrá efecto vinculante para el país que solicitó la consulta.

Las garantías del recurso de casación civil como segunda instancia

Las reformas efectuadas al proceso civil en general, tienen como fin principal el acceso a una justicia pronta y cumplida, de manera simple y organizada, mediante el empleo de un lenguaje técnico-jurídico claro, preciso y entendible para quienes conocen del derecho. Se trata de un Código que no pone trabas para su interpretación y aplicación, que elimina trámites dilatorios e innecesarios y que está dotado de una estructura que agiliza su comprensión, comenzando por lo general y terminando en lo particular de cada proceso.

El establecimiento de procesos céleres en materia de derecho civil y comercial, el respeto al debido proceso y la obtención de fallos más acertados, conforman los objetivos prácticos de la legislación procesal civil actual. Sin lugar a dudas, estas premisas garantizan el logro de mejores resultados en la esfera judicial costarricense. Se pueden citar cuatro cambios fundamentales en esta materia, que según se concluye mejoran la administración de la justicia.

- a. Limitación de los autos apelables, tal y como lo consigna el ordinal 67.3 del Código Procesal, únicamente serán apelables los autos que se enumeran en esos treinta y dos apartados.
- b. Preeminencia del recurso de revocatoria, situación que fortalece la figura del juez de primera instancia.
- c. Introducción de la apelación diferida en las audiencias orales.
- d. Eliminación de la apelación en las sentencias ordinarias de mayor cuantía y cuantía inestimable.

La clasificación de los medios de impugnación que se conocían como “derogado” del Código Procesal Civil de 1990, difiere del que prevalece con la reforma actual. En el código derogado, los recursos se clasificaban según los criterios: tipo ordinario (la revocatoria y la apelación con efecto diferido, adhesiva y por inadmisión) y tipo extraordinario (la casación y la revisión, por motivos de las causales y legalidad).

En el Código Procesal Civil actual se incorpora un nuevo recurso a la clasificación de los medios de impugnación ordinarios, los cuales quedan de la siguiente manera: recursos ordinarios (la revocatoria, la apelación y la casación -para los procesos ordinarios de mayor cuantía, cuantía inestimable y los casos en que autorice la Ley-) y recursos extraordinarios (la casación en interés de la ley, la casación en interés de la jurisprudencia y la demanda de revisión).

La casación como segunda instancia, representa un cambio trascendental para este recurso, ya que, garantiza el principio de recurribilidad para las partes en los procesos ordinarios de mayor cuantía y cuantía inestimable, conforme lo establecen los ordinales 65 y 69 del Código Procesal Civil. Esta transformación ha creado

polémica y cuestionamientos, principalmente por los abogados litigantes, si efectivamente ese recurso en la práctica será una verdadera segunda instancia en los referidos procesos.

Se ha tenido por acreditado que, la casación civil es un recurso de segunda instancia, donde se asegura la revisión de forma y fondo del fallo de los Tribunales de primera instancia, según los procesos que corresponda. Por ser esta la correcta acepción de lo que significa impugnar y recurrir una resolución judicial, la Sala Constitucional en diversos fallos ha defendido la tesis del significado correcto del principio de segunda instancia, manifestando que “segunda instancia no es sinónimo de apelación, pero sí de revisión de la sentencia que se recurre” (Richard, 1998, p.79).

Una diferencia del anterior sistema procesal, el derogado Código Procesal Civil, Ley No 7130 del 16 de agosto de 1989, conceptualizaba a la casación como un recurso extraordinario. Quiere decir que, un juez unipersonal conocía del litigio en primera instancia, se pronunciaba al respecto y lo resuelto por su autoridad podía ser recurrido en una segunda instancia por un Tribunal de apelación colegiado, conformado por tres jueces. Si se consideraba que una de las partes había quebrantado el derecho aplicable, se recurría ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se interponía un recurso de casación correspondiente, siempre y cuando el proceso contemplara alguna de las causales que la Ley establecía para la presentación del recurso.

Por último, la mencionada distribución jurisdiccional, es propia de un sistema escrito e integrado en su totalidad por nueve jueces que actuaban a lo largo del proceso. La estructura judicial actual se compone por ocho jueces entre el tribunal colegiado de primera instancia, constituido por tres jueces y la Sala respectiva, conformada por cinco magistrados. Esta distribución difiere de la composición anterior, según el sistema jerárquico que fue derogado.

Conclusiones

- El recurso de casación deja de ser un recurso extraordinario de legalidad, para convertirse en un verdadero recurso ordinario y ágil para la tutela del derecho a la segunda instancia, en los procesos que conozca. Por tanto, se habla de un modelo judicial basado en la oralidad, en el que en primera instancia se conoce el proceso de un tribunal colegiado, integrado por tres jueces, que brinda mayor seguridad respecto a lo resuelto, con motivo de la decisión consensuada de todos los integrantes del Tribunal. Si las partes se encuentran disconformes con lo decidido en la sentencia de primera instancia, ostentan el derecho a interponer el recurso de casación, que deberá ser resuelto por las Salas superiores de la Corte Suprema de Justicia conforme corresponda.
- En cuanto a la valoración de, si constituye una garantía la supresión de la apelación en las sentencias de procesos ordinarios de mayor cuantía y cuantía inestimable, se concluye que efectivamente ello no violenta el debido proceso, ni el acceso a la justicia. En tanto, no sea un recurso formalista lo resuelto por la Sala Primera, se podrá satisfacer esa segunda instancia y se espera que sea mejor.
- Los requisitos, las causales y el procedimiento ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, característicos de la casación civil, demuestran que esta figura procesal sí cumple con las exigencias de una verdadera segunda instancia. En su contenido se abarca todo lo resuelto para permitir que se efectúe una revisión completa de la demanda, de la prueba, de la admisión y de las demás etapas que caracterizan al proceso ordinario.

- El hecho de que se suprima el recurso de apelación para recurrir las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía y cuantía inestimable, conocida la apelación como una segunda instancia, no quebranta ninguna de las normas jurídicas estatales ni internacionales, relacionadas con los derechos fundamentales. Se trata de una decisión gubernamental que garantiza la celeridad en los procesos judiciales.
- La eliminación de la apelación no quebranta este principio, que es sinónimo de revisión del fallo, no de inclusión de la apelación en todos los procesos civiles. Con la casación civil como una segunda instancia, se protegen las garantías constitucionales básicas.
- El actual recurso de casación civil, responde a las garantías del debido proceso establecidas por los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La reforma realizada al recurso de casación civil, que lo convierte en una segunda instancia, no es violatoria según lo estipulado por el Derecho Internacional. La modificación instaurada a esta figura procesal, garantiza que su contenido esté acorde con lo que establece el Pacto de San José, al permitir que un Tribunal imparcial, en grado superior y diferente al que dictó la resolución, reconozca el fallo.
- El control que establece la casación es de una segunda instancia, en el tanto las causales del recurso se fundamentan en temas como la infracción o errónea aplicación de normas procesales que sean esenciales para la garantía del debido proceso, la vulneración del principio de inmediación por ausencia de jueces en las etapas del proceso, que en el dictado de la sentencia no hayan participado la totalidad de jueces solicitados por ley, ausencia o contradicción grave en la fundamentación, haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso y la incongruencia; las anteriores referidas a motivos de orden procesal. Las razones de fondo que permiten la interposición del recurso se refieren a la violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto y al quebranto de la cosa juzgada, siempre que se haya alegado oportunamente esta excepción.
- El contenido normativo del Código Procesal Civil y en particular la redacción del ordinal 69, sí cumplen con las finalidades de una segunda instancia. El recurso de casación teóricamente garantiza el acceso al debido proceso: una justicia pronta y cumplida. El problema que se visualiza sería en la implementación práctica del recurso, lo cual podría generarse en un futuro, cuando únicamente los cinco magistrados de la Sala Primera tengan que resolver los recursos de casación que se formulen en las siete provincias del país.
- Finalmente, se recomienda a la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Costa Rica, regular y reglamentar un sistema que permita acelerar la tramitación y resolución de los recursos de casación. Esta recomendación no solo se exhorta en la materia civil, sino también, a las demás materias del ordenamiento jurídico costarricense. Es necesario que se aplique el artículo 185, en concordancia con el Transitorio VI del Código Procesal Civil, con el objetivo de facilitar mecanismos que permitan realizar los ajustes pertinentes a la casación, a fin de darle el seguimiento necesario a los procesos judiciales que lo requieran. Una correcta aplicación del artículo citado ayudaría a desarrollar mecanismos que agilicen el recurso y beneficien a las partes. Esta normativa permite a la Corte Suprema de Justicia a reorganizar y especializar tribunales colegiados y unipersonales de primera y segunda instancia con un concepto interesante “[...] según lo amerite el servicio público”.

Referencias Bibliográficas

- Antillón, W. (2001). *Teoría del Proceso Jurisdiccional*. San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A.
- Artavia, S., y Hidalgo, X. (2014). Perspectiva Constitucional de la Casación Contencioso-Administrativa (Coord.). En “El recurso de casación (en materia contencioso-administrativa, penal, civil, agrario y familia)” (pp. 51-62). *Memorias II Congreso de Derecho Procesal*. San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A.
- Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. (1966, 16 de diciembre). *Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos*. Nueva York, Estados Unidos: Secretaría de Naciones Unidas.
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2017). *Constitución Política de la República de Costa Rica*. En V. Piedra (comp, 1ª. ed). San José, Costa Rica: Imprenta Nacional.
- Asamblea Legislativa. (1887, 28 de septiembre). *Ley N°.63. Código Civil*. San José, Costa Rica.
- Asamblea Legislativa. (1970, 23 de febrero). *Ley No.4534. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)*. <https://bit.ly/2zj1iRW>
- Asamblea Legislativa. (1989, 03 de noviembre). *Ley N°.7130. Código Procesal Civil*. Diario Oficial La Gaceta N°.208. <https://bit.ly/3b64NZb>
- Asamblea Legislativa. (2016, 08 de abril). *Ley N°.9342. Código Procesal Civil*. Diario Oficial La Gaceta N°68. <https://bit.ly/3fuGhV1>
- Cabanellas de Torres, G. (2008). *Diccionario jurídico elemental*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta.
- Calamandrei, P. (1945). *La Casación Civil Tomo I Historia y Legislaciones Volumen I*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bibliográfica Argentina.
- Calamandrei, P. (1945). *La Casación Civil Tomo I Historia y Legislaciones Volumen II*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bibliográfica Argentina.
- Calamandrei, P. (1945). *La Casación Civil Tomo II Bosquejo general del instituto*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bibliográfica Argentina.
- Corte Suprema de Justicia. (2014, 25 de junio). *Sentencia N°09888 de la Sala Constitucional. Acción de Inconstitucionalidad. Expediente 13-013532-0007-CO*. San José, Costa Rica. Recuperado de <https://bit.ly/343D6Qo>
- Corte Suprema de Justicia. (2014, 26 de febrero). *Sentencia N°002528 de la Sala Constitucional. Acción de Inconstitucionalidad. Expediente 13-011326-0007-CO. Código Procesal Contencioso Administrativo*. San José, Costa Rica. Recuperado de <https://bit.ly/3owUXYg>
- Corte Suprema de Justicia. (2016, 03 de febrero). *Ley N° 9342 de 2016. Código Procesal Civil*. Diario oficial La Gaceta 68, número 54. San José, Costa Rica.
- Gimeno, V. (2007). *El Tribunal Supremo, su doctrina legal y el Recurso de Casación. Estudios en Homenaje del profesor Almagro Nosete*. Madrid, España: Editorial Iustel Portal Derecho S.A.

- López, J. (2017). *Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el nuevo Código (Parte General)* (1ª. ed.). San José, Costa Rica: Edinexo.
- Loutayf, R. (1989). *El recurso ordinario de apelación en el proceso civil*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma.
- Morello, A. (2000). *La Casación, un modelo intermedio eficiente (2.a ed.)*. Buenos Aires, Argentina: Librería Editora Platense.
- Organización de Estados Americanos [OEA]. (1969, 22 de noviembre). *Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)*. San José, Costa Rica. <https://bit.ly/2TroGUp>
- Richard, M. (1998). *La Segunda Instancia en el Proceso Civil (1ª. ed.)*. Barcelona, España: Cedecs.
- Sánchez, R. (2001). *El Recurso de Casación en Costa Rica*. San José, Costa Rica: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Soto, O. (2003). *El Recurso de Casación Civil y su técnica*. San José, Costa Rica: Ediciones Jurídicas.